

Lineamientos generales para una estrategia de reconstrucción

José Antonio Alvarado

Introducción

Pocos días después del terremoto comenzaron a plantearse los primeros argumentos y lineamientos para la reconstrucción, principalmente proveniente de las asociaciones empresariales privadas del país. Los elementos básicos de la estrategia por ellas sugerida, parecen ser los siguientes: que el proceso debe ser comandado por la "libre empresa"; que si bien se debe prestar ayuda de emergencia a las familias directamente afectadas por el sismo, la reconstrucción debe ser resultado de la "reactivación" económica; que el Estado debe crear las condiciones y estímulos necesarios para impulsar la reactivación y la reconstrucción fomentando la "iniciativa privada"; que los recursos propios y la ayuda internacional para hacerle frente a los daños del terremoto, sea canalizada y utilizada bajo los lineamientos de esta estrategia. Los aspectos "vitales" a definir en este momento, serían: "1) una menor injerencia del gobierno en la economía; 2) la conveniencia de una mayor libertad de precios en los mercados de bienes y factores productivos; 3) una revisión del sistema proteccionista y de la política de incentivos; 4) el establecimiento de prioridades en el fomento de formación y el uso eficaz del capital".¹

Ciertamente, los planteamientos empresariales apuntan hacia un tipo de reconstrucción orientada por la lógica que ha regido tradicionalmente el funcionamiento de nuestra economía y que ha generado y agudizado los desequilibrios estructurales y la acelerada marginación de la mayorías populares; condiciones que están a la base de la magnitud alcanzada por los efectos del terremoto y, principalmente, condicionan la dimensión de la crisis económica, social y política que enfrentamos. Los planteamientos empresariales enfocan los efectos del terremoto exclusivamente como resultado del fenómeno natural, aislado de la realidad histórica del país; de ahí que propongan, en el mejor de los casos, simplemente "reconstruir lo destruido" por el sismo, es decir, reproducir las condiciones que expanden los efectos de los fenómenos naturales y que son el principio de la crisis nacional.

La aparente aceptación de los planteamientos empresariales por parte del gobierno salvadoreño y norteamericano, indicaría que llevarlos adelante acarrearía ventajas, principalmente económicas para unos y políticas para los otros. La canalización de la ayuda y los estímulos al sector privado podrían paliar temporalmente los problemas de acumulación, vía ganancia inmediata, de la gran empresa privada. Al mismo tiempo, esto posibilitaría el acercamiento, y quizás un compromiso mayor, de los sectores empresariales con los objetivos fundamentales de la estrategia contrainsurgente.

Ciertamente, los planteamientos de estos sectores señalan una alternativa que históricamente ha mostrado su incapacidad para resolver la grave problemática nacional y que, en el plazo inmediato, estaría apuntando más bien a la necesidad de "aunar esfuerzos" para impulsar la ampliación y profundización de la guerra, objetivo que por sí mismo niega cualquier validez a los planteamientos de reconstrucción esgrimidos por estos sectores.

Desde nuestro punto de vista, la estrategia de reconstrucción requiere una reflexión a partir de nuestra realidad histórica; los efectos del terremoto y las alternativas para hacerle frente deben contemplarse inmersos y condicionados por esa realidad. En este sentido, la estrategia de reconstrucción requiere, al menos, de la definición de 3 grandes componentes: el tipo o modalidad de reconstrucción requerida, la participación popular en el proceso y el financiamiento necesario para llevarlo adelante.

1. LA RECONSTRUCCION REQUERIDA

La reconstrucción debe tratar de minimizar o eliminar las condiciones que le imprimieron un mayor potencial destructivo al terremoto, y que no son otras que la injusticia estructural resultado de la estructura de propiedad y de la lógica de funcionamiento del modelo actual.

Ciertamente, los objetivos, valores y tipos de organización de nuestra sociedad se han definido a partir de la estructura de propiedad; y desde el punto de vista del gran capital nacional, el modelo exportador garantizaba la mayor rentabilidad inmediata, a expensas de la creciente marginación de cada vez más amplios sectores de la población, asegurando la reproducción de esa estructura de propiedad. Sin embargo, los ejes dinamizadores de este modelo, la escasa demanda interna proveniente de los sectores donde se concentra el ingreso y, principalmente, la demanda de exportaciones, ofrecen muestras claras de su indudable agotamiento. Este modelo ha mostrado ya su incapacidad para resolver la grave problemática nacional, no sólo en cuanto a hacerle frente a las necesidades básicas populares, sino también en cuanto a posibilitar el proceso de reproducción del gran capital nacional².

La incapacidad del modelo para solventar las necesidades básicas de la población, ha sido ya suficientemente evidenciada; baste señalar que, según datos oficiales de la CEPAL³, para finales de los años setenta, es decir, en una década de considerables tasas de crecimiento económico, la mitad de la población salvadoreña no lograba ni siquiera satisfacer su canasta básica de alimentos, en otras palabras, vivía en estado de extrema pobreza, mientras el 70% del total vivía en estado de pobreza.

Los desequilibrios sectoriales y regionales de nuestro país conducen a que en la zona metropolitana de San Salvador se concentre no sólo el capital, sino también

amplias mayorías de la población empobrecida, cuyas deterioradas condiciones de vida se manifiestan de múltiples formas. La incapacidad de la estructura agraria para absorber y mantener a la mano de obra agrícola y el escaso dinamismo, como generador de empleo, del sector moderno de nuestra economía, conducen a la población agrícola que emigra del campo y a la fuerza de trabajo disponible en la ciudad a encontrar en el subempleo la única fuente posible para obtener algún ingreso. Según cifras oficiales⁴, ya en 1978 el subempleo caracterizaba al 48% de la población ocupada del país. Los reducidos niveles de ingreso derivados de este tipo de actividades (vendedores ambulantes, talleres de costura, zapaterías, etc.) se reflejan en la marginación y pobreza urbanas, una de cuyas manifestaciones son los denominados "asentamientos populares" (tugurios, campamentos, mesones, casas viejas y colonias ilegales), que además de viviendas constituyen también, en muchos casos, lugares de trabajo. En 1976/77, el 59% de las familias que habitaban estos asentamientos percibían ingresos inferiores a 300 colones mensuales, y el 99% no alcanzaban ni los 400 colones mensuales⁵; mientras el costo de la canasta básica superaba los 500 colones mensuales. En 1985, el 53% de la población del área metropolitana de San Salvador habitaba en "asentamientos populares"⁶, con un nivel de ingreso no mucho mayor que hace 8 años pero con un costo de la vida casi 3 veces más alto que el de entonces.

De lo anterior se deduce que el tipo de vivienda prevaleciente en estas zonas, en cuanto a materiales de construcción, ubicación y equipamiento de servicios básicos, no resultan adecuadas para proporcionar seguridad y dignidad a sus habitantes. Según cifras oficiales, el 48% de las viviendas del área metropolitana de San Salvador en 1985, se catalogaban como inadecuadas, de acuerdo a los criterios anteriores⁷. No es de extrañar, entonces, que la mayor destrucción de viviendas derivadas del terremoto se haya dado en este tipo de barrios y asentamientos populares (San Marcos, San Jacinto, Santa Anita, Terminal de Oriente, Ayutuxtepeque, etc.). En un estudio muestral realizado por el Ministerio de Planificación⁸ en las zonas afectadas por el sismo, se encontró que el 42% de las viviendas destruidas eran de bahareque, el 17% mesones y sólo el 35% eran propias; el costo estimado de daños para el 49% de las viviendas resultaba inferior a 5000 colones. Según estimaciones de la FUNDASAL⁹, "para unas 56,000 familias, las pérdidas han sido totales o mayores, en tanto que se trata de viviendas sumamente precarias cuyo valor no pasa de los ¢15,000.00 y que, en una gran mayoría de casos, son lugares de trabajo también... (además) la infraestructura de carácter social con mayores daños es precisamente aquella dedicada a dar servicio a este sector".

Así pues, los sectores más afectados por el terremoto son aquellos mismos tradicionalmente marginados y desposeídos, que a pesar de ser excluidos de los frutos de crecimiento económico resultan funcionales a la lógica del sistema, en tanto que, además de servir de invernadero para un creciente ejército de reserva de mano de obra, muchos de sus integrantes se dedican a ofrecer bienes y servicios básicos a precios accesibles para las mayorías populares que, aunado a su subordinación al gran capital, coadyuva a la obtención de elevados márgenes de ganancia inmediata y al deterioro secular de las condiciones de vida de la mayoría salvadoreños.

En este contexto, el tipo de reconstrucción requerida adquiere dos características fundamentales que la definen: en primer lugar, es un proceso mucho más amplio y profundo que simplemente "reconstruir lo destruido"; el agotamiento de

los ejes dinamizadores y la dimensión de la crisis exigen un reordenamiento del modelo actual, un proceso de "volcarse hacia adentro, pero no con una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones que de suyo ya mostró sus propios límites, sino con una estrategia de desarrollo de las capacidades productivas y adquisitivas de los sectores populares".¹⁰

En segundo lugar, la reconstrucción trasciende a los sectores directamente afectados por el terremoto, sus alcances son mucho mayores, se trata, ciertamente, de un proceso de reconstrucción integral y nacional; y sólo en la medida que la reconstrucción de los daños derivados del terremoto se enmarque dentro de este proceso más global, podrá constituir una respuesta verdadera a las necesidades de las familias afectadas por el sismo.

Además, este tipo de reconstrucción no es compatible con la estrategia de guerra; por el contrario, requiere como condición indispensable y urgente la finalización del conflicto, cuyo financiamiento absorbe la mayor parte de los recursos de la nación y acelera la destrucción del país, imposibilitando cualquier intento de reconstrucción. Es indispensable la reorientación de los recursos del país hacia los esfuerzos de reconstrucción.

Si bien el tipo de reconstrucción propuesto requiere de medidas y cambios de más largo plazo, es posible plantear algunas acciones de corto y mediano plazo que, además, podrían señalar el orden de prioridades y posibilidades del proceso de reconstrucción, que abran el camino para la consecución de los objetivos últimos del proceso. Ciertamente, aunque no son los únicos que lo necesitan, habría que hacerle frente inmediateamente a las necesidades de los sectores populares afectados por el sismo; en esta tarea hay que considerar que la etapa de ayuda de emergencia, concebida como la provisión de los bienes y servicios básicos a la población afectada, puede extenderse por varios meses si tenemos en cuenta que las mayorías de estas familias han perdido "todo", incluidas sus fuentes de ingresos. Para la reconstrucción de las viviendas, obviamente, habría que definir el tipo de construcción y localización adecuada, que brinde seguridad y dignidad a sus habitantes, hay que considerar los costos y accesibilidad económica de las familias y los mecanismos de financiamiento; en este sentido, también habría que vigilar los alquileres y precios de las viviendas, a fin de evitar que constructores y casatenientes hagan "negocio" del terremoto; es indispensable una reforma urbana adecuada. Asimismo, es urgente la reconstrucción de la infraestructura social dañada.

Si bien es necesario reparar el aparato productivo y comercial afectado por el terremoto, no debe concebirse ésto como el "motor" de la reconstrucción de cuya expansión se derivaría el bienestar para las familias afectadas.

Llevar adelante un proceso de reconstrucción nacional requiere, al menos, dos condiciones: una, la finalización del conflicto y la otra, la urgente y efectiva participación de los sectores populares en el proceso de reconstrucción.

2. LA PARTICIPACION POPULAR

La dimensión y trascendencia del proceso de reconstrucción requiere la participación de todos los sectores nacionales con voluntad de contribuir a eliminar las condiciones que potencian los efectos de los fenómenos naturales y que están a la base de la crisis económica, social y política que, de manera continuada, amplía y

profunda, ocasiona mayores víctimas y desastres que el sismo del 10 de octubre. Es decir, se trata de un verdadero y gran esfuerzo nacional para crear las condiciones que viabilicen la existencia de la sociedad salvadoreña.

La magnitud y naturaleza del reordenamiento requerido para la reconstrucción y la superación de sus obstáculos inmediatos, la guerra principalmente, requiere la participación de agentes sociales con verdadera voluntad y capacidad de llevarla adelante. La definición de estos agentes sociales no obedece a criterios voluntaristas, sino a elementos objetivos emanados de la realidad histórica del país. Uno de los agentes principales para impulsar la reconstrucción nacional lo constituyen los sectores populares, que han soportado secularmente la irracionalidad del sistema y de la guerra, que sufren la marginación y pobreza.

Si bien la empresa privada puede y debe jugar un papel importante en la reconstrucción, ésta no debe subordinarse al "mercado" y a su lógica de funcionamiento que se traduce en la maximización de la ganancia inmediata y la marginación social.

Para superar los obstáculos y hacer avanzar la reconstrucción nacional se requiere contar con la suficiente fuerza, creatividad y verdadero espíritu de independencia nacional, verdadera voluntad de rescatar el derecho a decidir nuestra propia vida como nación. Además, una salida realista y racional a la crisis nacional es, sin duda, aquella que apunta hacia la satisfacción y atención prioritaria de las necesidades de las mayorías desposeídas de nuestro país.

3. EL FINANCIAMIENTO DE LA RECONSTRUCCION

La modalidad de reconstrucción requerida, integral y de carácter nacional, exige la reorientación de todos los recursos y capacidades de la nación prioritariamente hacia los esfuerzos de reconstrucción; requiere medidas de carácter coyuntural y estructural. Dentro del primer tipo, la finalización de la guerra es urgente; dentro del segundo, el readecuamiento de los criterios de asignación de recursos en función del desarrollo de las capacidades productivas y adquisitivas de la población, resulta indispensable.

La manera como se enfrente el problema del financiamiento de los daños derivados del terremoto, podría dar pistas del orden de prioridades y margen de viabilidad de la estrategia de reconstrucción requerida. Ciertamente, el terremoto no sólo ofrece la oportunidad de iniciar la reconstrucción, más bien vuelve más urgente su necesidad. La forma de abordar las necesidades de las víctimas del terremoto, el orden de prioridades que se establezca y los criterios y mecanismos de distribución de los costos y beneficios de la reconstrucción, podría servir de prueba para la capacidad y voluntad de llevar adelante el proceso más global y trascendental de la reconstrucción nacional.

Si bien los recursos necesarios para la reconstrucción de la capital, son relativamente, menores que los requeridos para la reconstrucción nacional, dado su monto y la aguda crisis y estrangulamientos financieros del país, requiere no sólo la urgente necesidad de terminar con la guerra sino, también, la implementación, desde ya, de medidas estructurales que posibiliten nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento, justos y no inflacionarios.

Las estimaciones oficiales de los daños derivados del terremoto señalan cifras que van desde menos de mil millones de dólares hasta 1,800 millones de dóla-

res. Se estima que una tercera parte de la población del área metropolitana de San Salvador, es decir, unas 500,000 personas, resultaron afectadas en diferentes grados; de éstas, alrededor de 300,000 perdieron totalmente sus viviendas o sufrieron daños de gran consideración. La producción y activos perdidos, representan casi la cuarta parte del PIB de 1986¹¹. Todo esto profundizará los ya graves desequilibrios estructurales internos y externos, y agudizará el deterioro de las condiciones de vida de la población.

La mayor parte de los daños son en concepto de vivienda, infraestructura básica y fuentes de trabajo, es decir, son elementos que requieren urgente reconstrucción. Alcanzar el monto y composición de los recursos requeridos se enfrenta a límites estructurales difíciles de superar. En este sentido, el problema del financiamiento requiere, al menos abordar tres aspectos: el o los agentes responsables de contratar los recursos en el monto y composición requeridos; las fuentes alternativas de financiamiento; y la capacidad de pago de los sectores directamente beneficiados por la reconstrucción.

a) Recursos requeridos y agente encargado de contratarlos

Las estimaciones más conservadoras de los daños del terremoto, sitúan el costo neto de reposición de éstos en alrededor de 900 millones de dólares, de los cuales casi el 50% corresponden a infraestructura social básica (vivienda, educación y salud), más del 40% a infraestructura económica y reparación del aparato productivo privado dañado por el sismo, y el resto a ayuda de emergencia, demolición y limpieza de escombros¹²; todos ellos de urgente necesidad.

El monto de estos recursos equivale a casi la mitad de nuestra deuda externa y recurrir a este tipo de financiamiento significaría dedicar alrededor del 70% de las divisas provenientes de nuestras exportaciones al servicio de esa deuda. Además, sólo la destrucción derivada del terremoto podría contraer el PIB de este año en más del 2% y aumentar el desempleo abierto en la zona metropolitana de San Salvador en un 10%.

La composición de los recursos requeridos es también problemática. Dado que de lo que se trata fundamentalmente es de la reconstrucción física de la capital, habría que considerar la capacidad, los requerimientos y el origen de los insumos del sector construcción; ya se estima que, en el mediano plazo, las necesidades de construcción superarán la capacidad de respuesta de este sector del aparato productivo nacional.

Analizando el origen de los insumos del sector construcción, tenemos que el 34% de éstos son importados (directa o indirectamente). Aún más, es precisamente el subsector vivienda el que presenta mayores requerimientos de insumos importados, alcanzando la proporción de 55%¹³; mientras la reconstrucción de viviendas representa un 60% del costo de reposición de la infraestructura social dañada por el terremoto. Esta composición de insumos señala límites adicionales para la obtención de recursos, y el agudizamiento de los desequilibrios estructurales; estimaciones oficiales señalan que para los próximos dos años los requerimientos de importaciones representarían más del 80% del déficit en cuenta corriente previsto para 1986.

La responsabilidad de contratar los recursos necesarios para la reconstrucción de la infraestructura económica y social y los gastos de emergencia y rehabilitación inmediata, recae fundamentalmente sobre el Estado; éste es el único

agente interno con la capacidad necesaria y accesibilidad a las fuentes de financiamiento.

Las estimaciones más conservadoras, sitúan el costo de reposición atribuible directamente al Estado (excluyendo vivienda y daños del aparato productivo privado), en una cifra cercana a los 1,400 millones de colones¹⁴, que ya para 1986 significaría un incremento del 25% en el déficit fiscal programado para este año y de más del 60% para los próximos dos años; mientras que las pérdidas de producción e ingresos derivados del terremoto, se reflejará en una contracción de los ingresos tributarios. A todo esto se agregarían los mayores requerimientos de gasto público derivados de la aceleración del proceso inflacionario (hay que tener en cuenta que los costos de reconstrucción se han estimado a los precios vigentes en 1986); ya se habla de una inflación cercana al 45% para finales de este año y de más del 70% para el próximo.

Si ya en los últimos años el presupuesto público ha venido enfrentando serias dificultades, éstas se agudizarán en los próximos años, volviéndose más urgente la búsqueda de nuevas fuentes no inflacionarias de financiamiento principalmente de carácter interno, que además de liberar del uso privado el monto de recursos requeridos, éstos provengan de aquellos sectores y agentes sociales cuya contribución no signifique un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares; es decir, se debe tratar de comenzar a revertir el patrón regresivo de financiamiento público.

Los urgentes requerimientos financieros por parte del Estado para hacerle frente a la reconstrucción, vuelve a confirmar la necesidad de dos de las condiciones antes señaladas: la finalización de la guerra mediante una salida política y que el sector empresarial privado no sea el encargado de comandar el proceso de reconstrucción. Respecto a esto último, otorgarle la batuta del proceso a la empresa privada significaría acrecentar el ya elevado sacrificio fiscal demandado para "incentivar" la "libre iniciativa"; aspectos que ya han sido planteados y exigidos por las asociaciones empresariales y sus institutos técnicos.

b) Fuentes alternativas de financiamiento

Las fuentes alternativas de financiamiento (internas y/o externas) vienen en parte condicionadas por el monto y, principalmente, por la composición de los recursos requeridos (insumos nacionales o importados). Ciertamente, el monto de recursos trasciende la capacidad de la economía interna, dado el acelerado agotamiento del que ha sido objeto; pero la composición de los recursos viene a señalar límites adicionales a la capacidad de financiamiento. Ya hemos señalado que, según estimaciones oficiales, en los próximos años se requerirá, al menos, un 80% más de recursos externos que los necesarios para mantener el déficit a los niveles prevalentes en 1986; esto, aunado a los estrangulamientos del sector externo, anuncian el agudizamiento de los desequilibrios estructurales hasta niveles realmente insostenibles.

En el corto y mediano plazo, los recursos para cubrir la reconstrucción de los daños derivados del terremoto están fuertemente condicionados por la composición de los recursos físicos requeridos; en este sentido es indispensable la búsqueda de fuentes de financiamiento externo compatibles con los esfuerzos e intereses de la reconstrucción nacional. Pero también, teniendo en cuenta las fuertes restricciones

del financiamiento externo, se deben desarrollar con seriedad y profundidad las posibilidades de financiamiento interno. En este sentido, es indispensable una reforma tributaria progresiva y la redefinición de los criterios para la asignación del crédito y del ahorro interno y externo, en función de los esfuerzos de reconstrucción. Los riesgos inflacionarios no sólo deben tratar de minimizarse evitando recurrir a emisiones monetarias excesivas, sino, fundamentalmente, la aceleración de los precios debe evitarse y contrarrestarse expandiendo la producción nacional; pero no cualquier tipo de bien o servicio sino aquellos que, como resultado del inicio del proceso de desarrollo de las capacidades productivas y adquisitivas de los sectores populares, tienda precisamente a satisfacer las necesidades de esas mayorías.

c) Capacidad de pago

El tratamiento de la capacidad de pago de los sectores directamente beneficiados por la reconstrucción se vuelve sumamente complejo en el caso de las viviendas, infraestructura social y material y herramientas de los pequeños y "micro empresarios".

Según estimaciones oficiales¹⁵, unas 23,000 viviendas fueron totalmente destruidas y otras 30,000 requieren reparaciones significativas. El 40% de las viviendas afectadas eran mesones y marginales y sólo un 35% eran habitadas por sus propietarios. El costo estimado de reposición de viviendas a los precios actuales es de 1,185 millones de colones (\$ 237 millones), considerando un costo unitario de ¢38,876 por vivienda destruida y ¢10,000 por vivienda semidestruida. Se estima que más de 40,000 familias no podrán enfrentar los gastos de reconstrucción de sus viviendas.

El problema se agrava si consideramos que muchos comercios y talleres del sector informal van unidos a sus viviendas, y que éste ha sido uno de los estratos más afectados. Se estima que en este sector se perdieron unos 40,000 empleos y unos 10 millones de colones en concepto de ingresos, como resultado del terremoto.

Si a lo anterior aunamos el hecho que gran parte de la infraestructura social destruida es aquella orientada a los sectores más pobres de la capital (sólo para reconstruir los hospitales, unidades de salud y escuelas públicas dañadas se requieren más de 600 millones de colones) y que la población del área metropolitana de San Salvador presenta tasas de crecimiento elevadas (entre 1971-1980, esta población aumentó un 60% y de 1980 a 1985 creció 80%) y que, además, desde antes del terremoto el déficit habitacional y de infraestructura afectaba a unas 100,000 familias, el problema adquiere dimensiones verdaderamente catastróficas.

La amortización de una vivienda de unos ¢35,000, a veinte años de plazo y con una tasa de interés del 6%, requeriría cuotas mensuales de alrededor de 250 colones, lo que constituye un "lujo" que no pueden darse la mayor parte de las familias de bajos ingresos afectadas por el sismo; más aún si consideramos que estos costos serían mucho mayores si se toman en cuenta elementos como la inflación, la dotación de una vivienda verdaderamente segura y digna que podría requerir sistemas de construcción antisísmicos y/o relocalización de viviendas.

Lo anterior refleja claramente la estrecha vinculación entre acceso a vivienda e ingreso familiar. El problema de vivienda no podrá resolverse si no se resuelve el problema del ingreso, y para esto evidentemente no basta con "crear 40,000 empleos" a los niveles de salarios existentes, que no representan más de ¢500 mensuales y que no basta ni siquiera para satisfacer la fundamental necesidad de alimenta-

ción, ni mucho menos para destinar \$250 al pago de vivienda. Esto viene nuevamente a confirmar la necesidad de los cambios estructurales y la redefinición de la lógica de funcionamiento de nuestra sociedad.

Ciertamente, el problema de la vivienda e ingresos de los sectores populares es sumamente complejo y requiere medidas de mediano y más largo plazo. Pero algo podría hacerse desde ya, por ejemplo: atender prioritariamente a la recuperación de los ingresos, bienes y servicios públicos de los sectores más necesitados, impedir los desalojos de las familias y/o reasentarlos en lugares adecuados y seguros, asegurar la transferencia de la propiedad de los predios a sus habitantes en condiciones accesibles, facilitar materiales y herramientas de construcción a precios bajos, reorientar y hacer accesible el crédito para reconstrucción de viviendas populares y recuperación de materiales y herramientas de los pequeños y micro empresarios, etc. Más que todo, es verdaderamente indispensable avanzar desde ya en la organización y participación popular y en la solución política del conflicto.

4. REFLEXIONES FINALES

Lo antes expuesto pone de manifiesto la gravedad de la problemática nacional presente y su agudizamiento futuro como resultado del terremoto, amén de la dinámica de los demás aspectos de la crisis salvadoreña. Como son los sectores marginados y desposeídos los mayormente afectados por la profundización de la crisis y deben jugar un papel importante en el proceso de reconstrucción, conviene finalizar este ensayo señalando 4 grandes retos que enfrentan estos sectores.

—Si ya antes del 10 de Octubre, la gravedad de la crisis económica, social y política, había puesto en primer plano la necesidad de terminar con la guerra, la situación actual aclama a gritos la urgencia del diálogo y la paz; y ésto podría convertirse en realidad mediante la decidida participación y movilización popular.

—El problema de la reconstrucción no es sólo un asunto técnico que se pueda resolver nada más definiendo tipos de construcción, localización o mecanismos de financiamiento; la reconstrucción es más que todo un problema de lógica de funcionamiento del sistema, de valores, objetivos y prioridades, es un problema económico, social y político. En ese sentido, es totalmente indispensable la participación mayoritaria de los sectores populares afectados por el terremoto en torno a la formulación e implementación de las políticas de reconstrucción.

—Las mayorías populares deben participar en la discusión de las formas y mecanismos de financiamiento de la reconstrucción; que éstas no empeñen aún más nuestra soberanía nacional, que no se traduzcan en excesivas presiones inflacionarias o hagan más regresivo el financiamiento público. En fin, se debe procurar que los mecanismos de financiamiento no se traduzcan en un mayor sometimiento y deterioro de las condiciones de vida de la generación presente, ni mucho menos de las generaciones futuras.

—La experiencia del terremoto, de sus efectos, de las condiciones que los expandieron y los retos de la reconstrucción, constituye un elemento adicional que pone nuevamente en evidencia la irracionalidad e injusticia del modelo actual y la necesidad de reordenar la economía y sociedad salvadoreña, de redefinirla en función de los sectores más humildes de este país.

NOTAS

1. FUSADES. Boletín económico y social", No. 16 -Octubre 1986, San Salvador, pág. 5.
2. Departamento de Economía. "Dinámica y crisis de la economía salvadoreña", ECA, Enero-Febrero 1986. San Salvador.
3. Departamento de Economía. "Crisis, diálogo y autodeterminación. Lineamientos de un modelo alternativo para El Salvador", ECA, Agosto-Septiembre 1986. San Salvador.
4. Ibid.
5. vease, León René, "A propósito del terremoto: una visión panorámica de la situación habitacional en el área metropolitana de San Salvador", en este mismo número del Boletín de Ciencias Económicas y Sociales.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. MIPLAN. "Evaluación de daños causados por el terremoto del 10 de Octubre".
9. FUNDASAL. "Después de la emergencia: necesidad de una política de vivienda popular a mediano y largo plazo", La Prensa Gráfica, 8 de Noviembre 1986. San Salvador, pág. 28 y 29.
10. Departamento de Economía. "Crisis, diálogo y autodeterminación. Lineamientos de un modelo alternativo para El Salvador", en op. cit.
11. MIPLAN. op. cit.
12. Ibid.
13. Corleto, L. y Palma, R. "Articulación construcción-industria -sector externo", (adelanto de tesis), UCA, San Salvador.
14. MIPLAN. Op. cit.
15. Ibid.